

XDO. DE INSTRUCCIONES N. 2 PONTEVEDRA

C / FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE S / N.
Teléfono:

Equipo / usuario:
Modelo: 607600

DPA PROCEDIMIENTOS PREVIOS PROC. ABREVIADO 0000396/2020

NIG: 36038 43 2 2020 0001068
Delito / Delito Menor: RESISTENCIA / AUTORIDAD DESOBED SERIA / AGENTE / PERS SEC PRIV
Reclamante / Reclamante: MINISTERIO DE IMPUESTOS
Abogado
Abogado
Contras: RUSLANAS
Abogado
Abogado: ENRIQUE DOBARRO BUITRAGO

AUTO

En PONTEVEDRA, el dieciséis de abril de dos mil veinte.

HECHOS

Primero.- Se recibió Atestado numerada Policía Nacional como 2818/2020 junto con el cual fue presentado como detenido Ruslanas

Además del hecho que motivaron el arresto se denuncian varios hechos anteriores que tratamos de exponer de una manera cronológico:

Hecho 1 (suposición anterior que ya ha motivado el inicio de otros) procedimientos legales).

Que el 8 de abril se procesó el Certificado 2708/20.

Junto con ese Certificado se presentó el mismo detenido. Que el motivo de la detención y puesta a disposición estaba relacionado con la posible comisión de un delito de desobediencia y un delito de robo. Que entre el 20 de marzo y el 7 de abril

fue acusado de cuatro cargos de infracciones administrativas en relación con las limitaciones derivadas del estado de alarma.

También fue acusado de dos delitos graves de robo participación en la lucha en la que uno podría haberse comprometido robo

Hecho 2 (quejas administrativas anteriores).

Que en las 24 horas previas al arresto se había propuesto en varias ocasiones para sancionar por la misma infracción
 Derecho administrativo relativo a las limitaciones derivadas del Estado de Alarma
 Específicamente:

Página 2

Parte 215263. En la cual se afirma que a las 6.30 pm del 14 de abril se activó la alarma de la Farmacia de la calle Benito Corbal nº 50. A yendo al lugar aclaró que no se había hecho ningún intento de robo. En ese momento se identifica en la calle Andrés Muruais detenido y, junto a él, un . Proponen sanción y retirarse del lugar. No se cumplen los requisitos.
 La parte 215252 se refiere al mismo hecho.
 Parte 215916. En el que parece que a las 01.48 del 15 de abril estaban identificado en la calle Joaquín Costa el detenido y . No se cumplen los requisitos. Parte 215737. En qué se registra que el detenido fue identificado y pero no aclara ni cuándo (en ningún caso antes de las siete de la mañana) ni donde No se cumplen los requisitos. No esta aclarado si la referencia es la misma ocasión que en la parte anterior pero parece que esto es así y que uno responde al acto concreto y el otro al resumen de la noche.
 Parte 217019. En el que se afirma que a las 15.10 del día 15 de abril el detenido había ingresado al supermercado atrapado por Froiz de Benito Corbal algunas cosas y me sorprendió lo que, cuando se requirió por los empleados, dejó caer cosas y se fue. Cuando los agentes hablando con la persona a cargo del Froiz observó al detenido entrar al Supercor siguiente. Los detenidos y son identificados . El detenido es se proponen para sanción
Hecho 3 (otro delito menor de robo el mismo día).
 Que a las 14.22 horas del 15 de abril se presentó lo mismo que el detenido había tratado de sacarlo de la farmacia ubicada en la calle Frai Juan Esquina Navarrete con productos de la calle Sagasta por valor de 14.95 euros
 Estos hechos dieron lugar a la certificación 2817/20.
 La parte 21677 aclara que el detenido había sido detenido por personal de la Farmacia y que a su llegada los agentes ubicados en su jadea el gel robado. estaba en el exterior de farmacia. Está claro que ambos fueron denunciados nuevamente por el violación de las regulaciones administrativas.
Hecho 4 (acción en la que tiene lugar el arresto).
 Que a las 17.09 del 15 de abril se advirtió a la Policía que

La alarma de la farmacia de la calle Rosalía de Castro había sido activada. Allí se les dice que un hombre había intentado ponerse y quitarse cremas arrojado por los dependientes, rumbo al Froiz de esa calle lo que le cerró las puertas impidiéndole entrar. Vino entonces al supermercado DIA donde recogió paquetes de jamón para uno importe de 41,86 euros.

La policía lo identificó y localizó a aquellos en su ropa productos

Luego verificaron que hubo una serie de acusaciones anteriores por infracción administrativa.

Luego proceden a arrestar a Ruslanas

Atestiguó que " *en dicho arresto el presentado como detenido*

. Manifiesta el

Página 3

Ofrece resistencia activa a los agentes, teniendo que use la fuerza mínima necesaria para proceder con su arrugado "

La presentación como detenido es por la presunta comisión de un delito. de desobediencia o resistencia a los agentes de autoridad.

A pesar de esto, el crimen que motiva el arresto es claro ofreció acciones a la dama del DIA

como empleado

Segundo.- Al recibir el Certificado, se inicia el presente procedimiento preliminar en el que se llevó una declaración al detenido, que se valió del derecho a no declarar y retenido Apariencia en relación con su situación personal. Na aparición la Fiscalía instó a la adopción de la medida de prisión provisional apelando al punto 2 del artículo 503 del LACrim. La defensa expresó su oposición.

RAZONAMIENTO LEGAL

Primero.- Lo primero que debemos aclarar es el objeto de este instrucción

Como se indica en el fondo, el detenido fue presentado como tal por la presunta comisión de un delito de desobediencia y o resistencia Además de los hechos a los que se hace referencia en este documento, se informan hechos que podrían constituir un delito menor de robo que estaría en el grado de intento por lo que sucedió alrededor de las 5 p.m. Farmacia de la calle Rosalía de Castro y que no se aclara si llegó a ser consumado por lo que sucedió poco después en el supermercado DIA. Además se mencionan otros hechos que podrían constituir delitos contra la propiedad que habrían resultado a otras diligencias. Por eso es necesario **emitir testimonio en relación con los hechos que pueden constituir delitos activos para proceder con el procesamiento en cuestión**

diferente .

Permanece como hechos objetos de esta causa, en consecuencia, el se refirió a la presunta comisión de un delito de desobediencia y o de resistencia

Tercero.- Sobre el delito de desobediencia.

El delito de desobediencia protege el buen orden legal público. Lo defiende mediante la defensa, instrumental para ese fin, de principio de autoridad. Específicamente en términos de ese principio implica la necesidad de los mandatos específicos emitidos por el autoridad y sus agentes en el ejercicio de sus funciones no son desconocidos para sus destinatarios específicos. Todo mandato de una autoridad o sus agentes está justificado. en una regla que le confiere el poder que ejerce al emitirlo. Esa regla, fuente de poder, protegerá varios activos y intereses Pero esos bienes o intereses no son propiamente objeto de protección de este tipo criminal aunque, obviamente, se ve que están protegidos reflexivamente. El agente de la autoridad, por ejemplo, emitirá una orden para hacer cumplir

3

Página 4

normas de tránsito que protegen la seguridad vial. Pero un sanción penal de desobediencia a ese agente en particular destinado Proteger el principio de autoridad y no la seguridad vial. Por lo tanto, no es posible, en general, entender que la conducta está libre de sanciones. desobediente apelando a la relación del mandato concreto con el fin del regla que se aplica con el. Otra cosa diversa es que influye en la evaluación de la gravedad (la mayor distancia entre el mandato concreto y el propósito para el cual la capacidad de darlo, menos seriedad) o que el mandato concreto sea manifiestamente ilegal o, por alguna otra razón, no acreedor de protección penal

El cumplimiento de las normas generales no puede dar lugar a más de un cumplimiento o incumplimientos, no a delitos de desobediencia

Solo se desobedece un mandato específico. La regla general, aunque introducir prohibiciones, no es probable por sí mismo ser desobedecido en este sentido criminal.

El mandato debe ser concreto de manera objetiva y subjetiva.

Objetivamente en cuanto tiene que haber un acto que concrete en un plazo determinado la disposición de la regla general.

Subjetivamente en la medida en que debe haber un acto de autoridad o sus agentes dirigidos a una persona específica (el autor de conducta).

La conducta es desobedecer, y desobedecer es omitir el comportamiento impuesto por el mandato. Para poder omitir eso

el comportamiento tiene que ser conocido su contenido y eso fue objeto de un mandato. La mejor manera de demostrar ese hecho es demostrando que había un requisito formal para explicar que era un mandato, que era lo que se ordenaba y lo que era consecuencia de no cumplir con ello. Pero lo que constituye el crimen es el hecho de conocer el mandato, la obligación de cumplirlo y el hecho de no atenderlo. Por lo tanto, es discutible el requisito de que si produce una advertencia formal de advertencia de la consecuencia penal. Su ausencia puede en algunos casos resultar en la ausencia de engaño entendido como conocimiento de esos elementos típicos: o mandato, el mandato y las consecuencias de la falta de atención. Con la aprobación del **Real Decreto de Alarma** se impone una serie de prohibiciones relacionadas con el movimiento de personas. Estamos ante una norma general que impone una Ley de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En ese trabajo podrán tener que emitir órdenes específicas a las personas que violan un prohibición o incluso a otros que aún no la habían violado. Son dos supuestos diferentes:

A) Existe una prohibición general del tráfico rodado.
público

Es un mandato general. No hacerlo significa (o puede significar) un delito administrativo con multas que pueden llegar a ser alto. Policía cuando identifican al presunto hecho (estar en la calle sin justificación) presenta una queja

4 4

Página 5

ante el órgano administrativo que describe el hecho. Puedes (o no puedes) además de exigir a la persona que cumpla con la norma y que requisito puede (o no) materializarse en una conducta determinado ("te vas a casa"). En este caso pasamos a la segunda suposición.

B) La policía requiere conducta sobre un tema en particular. Es un mandato concreto. Su falta de atención puede significar una infracción administrativa. Lo real no se aplica correctamente. Decreto La Ley Administrativa correspondiente a la caso.

Las situaciones pueden ser variadas. Por la fundación de la requisito que solo puede ser el control del cumplimiento de las medidas del Real Decreto de Alarma o estar acompañado por otros razones (por ejemplo, que en ese caso una control de drogas, o que en esa área no puede ser con o sin la situación de alarma, o que hay una alteración de la orden público diverso). Por el mismo requisito no puede existir (policía que solo comunica la sanción propuesta sin comentario principal), que puede ser genérico (refiriéndose solo a

cumplir con la Ley sin mayor precisión) o que puede ser específica (Regreso a casa). Por los supuestos fácticos que lo provocan (salía a caminar, iba al Banco, iba a asistir a una familia) y por las posibilidades de cumplimiento (indicar que regresar a casa a quien lo que no tiene es hogar, o requerir a quién se encuentra viajando desde muy lejos volviendo a ese punto de origen).

Algunas de estas situaciones de no cumplir con la lata requerida constituir un delito de desobediencia .

En cualquier caso, **el desobediente, a los fines de la evaluación penal, nunca es la norma general sino el mandato concreto recibido .** Por que lo que debe analizarse es en qué circunstancias si producido ese mandato.

Para que sea un delito, la desobediencia debe ser grave .

La gravedad deriva del conjunto de circunstancias. Entre ellos es cómo afecta el principio de autoridad. Por ejemplo, una violación pública y ostentosa puede debilitarse antes de comunidad ese principio de autoridad. También debe ser evaluado si existe o no afecto por la propiedad protegida por la norma que protege el mandato. Ya hemos dicho que no es objeto de protección, pero debe tener cuidado en términos de gravedad de conducta. El encierro tiene como objetivo evitar el contagio por contacto entre personas o personas con cosas tocadas por otras personas. La única forma (parece ser) de ejecutarlo es haciendo una regla general sin excepciones. Eso puede justificarlo que, en cualquier caso, el incumplimiento de la regla general da como resultado responsabilidad administrativa y desprecio por el mandato concreto también tiene esa respuesta administrativa. Una consideración como conducta criminal requiere algo más que eso.

5 5

Página 6

Además, solo la desobediencia se considera penalmente relevante que merece una seria consideración. Para evaluar la gravedad. y dar importancia criminal si es posible valorar (no exigir como esencial pero para pesar) que ocurre una condición a los efectos de la norma que protege el mandato específico. Por ejemplo, es más grave ignorar el mandato cuando estás en posibles circunstancias de propagación (por estar infectado en sujeto, por el lugar de tránsito, o por estar cerca de personas de riesgo) y así es cuando la confianza general en el cumplimiento del estándar de confinamiento (por ejemplo, por ostentación de incumplimiento en redes). Es menos grave en otros casos. Y aquí también debemos tener en cuenta que el conducta ya tiene una respuesta en la responsabilidad

administrativo

En cualquier caso, **una persona es reportada varias veces sin**

asume que necesariamente debemos entender que está cometiendo un delito . O

ser denunciado varias veces es una reiteración de infracciones administrativas, pero no se introduce en ese hecho, por lo tanto conducta típica descrita: no tener en cuenta los mandatos específicos.

Habrán momentos en que, además de ser denunciado, la persona

varios a veces recibir varios mandatos hormigón e

los descuidó. Luego tendrá que ser analizado en caso de que

consistió en esa falta de atención, y desde allí es un solo acto

desobediencia, varios actos de desobediencia o si alguno de ellos

estaba justificado y otros no. Además, habrá

justificar esos casos (esos casos o parte de esos casos)

merecen una seria consideración por cómo afectan el

principio de autoridad y, más cautelosamente, por cómo afectan

a los bienes a proteger por la regla general prohibitiva.

Al dar un ejemplo con otra regla que conduce varias veces

más rápido de lo permitido, y por lo tanto viola la regla general

de Tráfico, por lo tanto, no comete un delito.

Cuarto.- En el caso específico.

Como se establece en el fondo en el Certificado se hace referencia a

Varios hechos. Parte de ellos son objeto de otra causa.

procesado por otro tribunal (lo que llamamos Hecho 1).

Los otros se concentran el 14 y 15 de abril.

En referencia a esos días se afirma que en tres ocasiones anteriores

En el momento de la detención, el detenido había sido denunciado por ser un

Violar las normas generales sobre el tráfico de la calle. A las 6:30 p.m.

de 14, a las 1:48 de 15 y a las 15:10 de 15. Hay dos partes de

intervención más, pero todo eso indica que serían partes en

Los mismos hechos realizados por otras patrullas o agentes.

En ninguno de estos casos se indica en las partes adjuntas.

que se haga un requerimiento de cualquier tipo a los ahora detenidos.

(Hecho 2 del fondo).

Además de estos tres casos, a las 14:22 está claro que era

identificado después de la posible comisión de un delito menor de robo,

Página 7

parece que en grado de intento. Tampoco está en la lista

No expresó ningún requisito. (Hecho 3 del fondo).

El siguiente momento ya es el que terminó con el arresto (Hecho

4) Sucede a las 5:09 p.m. el 15 de abril. Como vemos, esto sería

el quinto hecho y no el séptimo como se indica en la Certificación de Fracaso

de verificar cómo se ven las duplicaciones en las partes. Del total

de las quejas producidas sería el noveno y no el número

dieciséis

La información proporcionada por la estación de policía no se indica ningún requisito específico que se haya practicado. Sera objeto de esta instrucción, por lo tanto, en primer lugar aclarar si se ha producido algún tipo de requisito y / o advertencia en tales casos, así como los términos de la misma y forma de respuesta dada por el investigador.

Entendemos que los hechos actualmente no tienen suficiente precisión en términos de su descripción, ni determinación de indicaciones de apoyo para poder proclamar claramente Su alcance exacto.

Una vez que los hechos se hayan materializado, será necesario evaluar si son existían esos requisitos y si hay una continuidad entre ellos También será necesario determinar qué relación tendrían estos hechos con lo que sucedió antes del 7 de abril y eso es para ser objeto de otro caso en otro tribunal.

Solo después de ese análisis será posible evaluar si realmente encaja predicar que se ha cometido un delito de desobediencia.

En cualquier caso, a la hora de evaluar la adopción de medidas encontramos la falta de solidez de la evidencia presentada.

Debemos agregar que tampoco hay concreción sobre qué sucedió en el momento del arresto o sobre amenazas que podría haber sido pronunciado y la fiscalía tampoco se refirió esos hechos en sus alegaciones como justificadores de la medida instada

Quinto.- Sobre la medida de encarcelamiento provisional.

El delito de desobediencia, que es a lo que se refiere la petición del Ministerio Público, se sanciona en el artículo 556 del Código Pena con una pena de tres meses a un año o una multa de seis a dieciocho meses

No es solo que la sentencia esperada no exceda de dos años (está en el medio) pero parte de un mínimo mucho más bajo (tres meses) y es solo una alternativa con la multa de una multa. Esos circunstancias dan cuenta de la entidad que la legislatura dio un esa conducta

La detención provisional está regulada, siempre que requisitos y propósitos que pueden justificar su adopción, en el artículo 503 LACrim. En principio, el pronóstico normativo solamente permite tal medida de precaución cuando la pena máxima siempre que el delito acusado sea igual o mayor a dos años de prisión En este caso no se cumpliría tal requisito con el cual

503 LACrim.

El artículo 503 (2) permite que se adopte esa medida para evitar el riesgo de que el investigado cometa nuevos hechos criminal. Dentro de este propósito, la Ley requiere que la pena máximo esperado excede esos límites, excepto en el no regulado último párrafo del mismo precepto. En ese párrafo permite un adopción de la medida de prisión provisional para evitar riesgo en dos casos, incluso si el requisito de la lo siento Uno se refiere a la actuación concertada de manera organizada. cometer los hechos alegados, que no es aplicable a este caso. El otro es el que " *realiza sus actividades delitos con habitualidad* ". Este sería el supuesto hecho que la Fiscalía entiende que está presente.

Antes de entrar en el análisis de ese último requisito debemos enmarcar la suposición de hechos con cierta precisión.

Se refiere al argumento de la fiscalía sobre la situación de Estado de alarma Sin embargo debemos tener en cuenta que el Gobierno optó por la declaración de tal estado no sin verdades críticas doctrinales sobre la suposición fáctica y el alcance que podrían tener las medidas tomadas en él. En la Ley Orgánica 4/1981 de 1 de junio de estados de alarma, excepción y sitio, encontramos que en su artículo 10 en el referido al estado de alarma y alas consecuencias solo en el incumplimiento de sus medidas establece que " *será sancionado de conformidad con las disposiciones de la leyes* ". No hay noticias sobre responsabilidad procedimientos penales o procesos penales. **La misma ley con respecto al Estado de excepción si prevé expresamente una consecuencia :** " *Si durante el estado de emergencia, el juez estimó la existencia de hechos contrarios al orden público o la seguridad ciudadano que puede constituir un delito, escuchó el La Fiscalía decretará la prisión provisional de la presunto autor; quien deberá, a su discreción, durante ese estado* ". El alcance exacto de eso podría discutirse pronóstico pero lo que está claro es que no existe en el caso de estado de alarma.

El segundo alegato apela al peligro que puede representar para el incumplimiento de la salud pública con el confinamiento. No aplicable en toda duda en esta resolución tal medida tomada con respecto a toda la población ni su importancia en el En el momento en que nos encontramos. Pero es necesario advertir que no se puede inferir de la gravedad general de la situación, ni de la beneficioso que en general es el confinamiento de la población, cuya consecuencia cualquier individuo La infracción plantea el mismo grado de peligro. Es necesario especificar cómo esta infracción en particular planteaba ese peligro. Pero Además, resulta que hay medidas que deben ser acordadas por el Autoridades sanitarias, sin recurrir al derecho penal, para responder a supuestos de riesgo específicos. Así se deriva de la Ley

Página 9

Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en salud pública (especialmente el artículo 2), Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Salud, Ley 41/2002, de 14 de Noviembre, Básico que regula la autonomía del paciente (sobre todo el artículo 9.2), Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de la Salud Pública o, finalmente, el Artículo 8.6 en su párrafo según la Ley 29/1998, de 13 de julio, de Jurisdicción litigios administrativos. De este marco regulatorio se deriva que **la respuesta si lo que quieres conjurar es un riesgo para la salud público no está en derecho penal y en el proceso de ese la naturaleza**. Está claro, nuevamente, que está protegido en este tipo criminal es el orden público y es el afecto por él lo que debería ser valorado tanto para determinar la gravedad del caso particular como origen de las medidas cautelares.

En este marco debemos preguntarnos sobre el propósito que es tiene la intención de conspirar con la prisión preventiva a petición del Ministerio Público. Como hemos visto, ese propósito sería evitar la comisión de nuevos hechos. Deberías traer aquí un cotejo el reciente fallo del Tribunal Constitucional STC 62/2019, de 7 de mayo:

*" Nuestra tarea debe limitarse al examen de argumento que el poder judicial utiliza para justificar el riesgo de reincidencia criminal, para evaluar si resulta irrazonable, arbitrario o contrario a la doctrina de Tribunal Europeo de Derechos Humanos reflejado en base legal 3 c) de la STC 30/2019 ya mencionada, oferta «Cobertura de las decisiones generales de prevención dirigidas contra un individuo o una categoría de individuos que se estima constituir un peligro debido a su continua tendencia a crimen pero, más limitadamente, en el contexto de la enjuiciamiento de un delito , arts. 5.1 (c) y 5.3 del Convenio, interpretado juntos permitir un los Estados los contratistas imponen y mantienen una privación con el tiempo detención preventiva como medio de **prevención de un delito penal concreto y específico, propósito que debe basarse en hechos o información específicos basado en datos objetivos** ".*

El propósito provisto por LACrim para aceptar el encarcelamiento provisional para evitar el riesgo de cometer nuevos hechos siempre ha sido definido por el propio Tribunal Constitucional como ubicado "en otro plano" con respecto a otros fines legítimo (riesgo de fugas, obstrucción del proceso o de protección de la víctima). Tal expresión ha sido con buena argumentos interpretados como fuente de una interpretación más todavía restrictivo de la restricción ya predicada de otros casos. Pero, en cualquier caso, no permite proteger en ese sentido un pretenden conjurar un riesgo genérico de nueva comisión crímenes Como se indica en el fragmento transcrito, debe existir

Página 10

una posibilidad concreta de que exista cierto hecho que puede afirmarse como una comisión muy probable. Por otro lado, tal propósito de interpretación necesaria restrictivo, además, se solicita que se aplique a un supuesto para lo cual esta medida generalmente no está prevista. Es decir para un caso de pena máxima esperada de menos de dos años Tal suposición de hecho legal parece requerir aún más restricción en la interpretación. De ahí la interpretación de la el concepto de " *habitualidad* " debe tener esa misma nota. Ciertamente dicho término no requiere la presencia de antecedentes penales pero sí requiere que se entienda que lo que generalmente se hace es cometer crímenes De lo contrario, lo sancionado sería un modo de la vida La habitualidad puede ser un concepto vago, pero se refiere a algo que se hace tantas veces, con tanta frecuencia y de tal manera que tolera hablar de uno hábito Es más que una repetición de una conducta como debería llegar a tener entidad que la repetición a considerar ya usual.

Sexto.- Sobre el caso específico.

Trayendo todo lo que acabamos de exponer al presente caso entendemos que no se puede acordar la medida de encarcelamiento provisional instado.

Estamos, como hemos visto antes, enfrentando una imputación no sólida en cuánto no aparece en el Certificado más que en el decimocuarto día en el quince fueron identificados cinco (no siete veces) y no no se indica si se han cumplido los requisitos, o incluso si algunas de estas quejas no responden al mismo tiempo dado Su proximidad en el tiempo.

Estamos ante un delito que tiene una multa de una multa y otra. alternativa al encarcelamiento de tres meses a un año. Es, por lo tanto, muy lejos de los límites generales de esta medida de precaución.

La situación del estado de alarma no implica ninguna variación. de las normas habituales para evaluar las medidas cautelares. Si la declaración de un estado podría implicar algún tipo de variación de excepción

Los posibles riesgos para la salud no se materializan de ninguna manera. ninguno en el Certificado en este caso particular. En cualquier caso, de existen, tienen respuesta en el campo administrativo de la salud.

No hay un pronóstico concreto suficientemente sólido de ciertos actos que podrían cometerse nuevamente.

Existe una sospecha muy razonable de que el investigador puede sea que nuevamente viola las reglas generales. Pero ese pronóstico no es igual a la predicción de un acto concreto que puede preverse y que tiene en sí la naturaleza de un crimen.

Finalmente, en cuanto a la habituación, tampoco lo observamos.

Dado el tiempo transcurrido desde que se decretó el estado de alarma y con él, las medidas restrictivas de la libertad fueron acordadas ambulatorio ya es difícil decir que un acto puede tener Ven a adquirir el carácter de hábito. Se puede decir que fue

10

Página 11

repitió este mes y poco, pero de allí a la consideración de tal habitualmente creemos que hay un paso. Pero también es Estaríamos valorando los mismos hechos dos veces. Por un lado se argumenta que es el hecho de haber descuidado repetidamente requisitos que hacen que la conducta con el criminal sea trascendente que adquieren significación criminal como un hecho único. Se afirma de inmediato que este último hecho es común tener sucedieron las anteriores pero esas anteriores, así que Acabamos de decir que forman la unidad con este. En resumen, la situación puede generar cierta afición por los pronósticos. de orden público pero atención a esas necesidades que no creemos que en este caso se solicita en la medida en que instrumental para el proceso criminal específico y no para las necesidades orden publico preventivo.

Séptimo.- No se han instado otras medidas ni seremos ni en los casos regulados en el artículo 57 del Código Penal para que se refiere al Artículo 544 bis LACrim por lo que no se aplica No evaluar otras medidas alternativas. Por último solo indicar que la fiscalía instó, de alguna manera subsidiaria, que en caso de que la medida solicitada no sea aceptada el procedimiento se transformará en diligencias urgente Sin embargo, tal transformación no es posible. Recibido el La certificación no se inició ni fue solicitada por el Ministerio. Fiscal, un procedimiento de los llamados procedimientos Urgente En cualquier caso, dada la necesidad de verificar el aspectos del tipo criminal discutidos anteriormente, no aparecen como causa de instrucción simple en términos legales. Una vez Los procedimientos iniciados antes de su transformación dependen de disposición del punto 5º del artículo 779 LACrim, es decir, el reconocimiento de hechos que no ocurrieron en este caso. No La transformación solicitada continúa.

PARTE DEL DISPOSITIVO

NO ACEPTE la medida del encarcelamiento provisional que procede a liberar a Ruslanas comparecer ante este tribunal en el momento en que es convocado. NOTIFICAR esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra los mismos podrán interponer recursos de reforma en el

con la obligación de

dentro de los tres días de su notificación y / o apelación
No cinco días.

Este es enviado y firmado por Xermán Varela Castejón, magistrado de la
Juzgado de Instrucción N ° 2 de Pontevedra. Doy fe.

EL JUEZ-JUEZ

EL ABOGADO JUDICIAL



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

XDO. DE INSTRUCCIÓN N. 2 PONTEVEDRA

C/ FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE S/N.

Teléfono: [REDACTED]

Equipo/usuario: [REDACTED]

Modelo: 607600

DPA DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000396 /2020

N.I.G: 36038 43 2 2020 0001068

Delito/Delito Leve: RESIST/GRAVE DESOBED AUTORID/AGENTE/PERS SEG PRIV

Denunciante/Querellante: MINISTERIO FISCAL

Procurador/a:

Abogado:

Contra: RUSLANAS [REDACTED]

Procurador/a:

Abogado: ENRIQUE DOBARRO BUITRAGO

A U T O

En PONTEVEDRA, a dieciséis de abril de dos mil veinte.

FEITOS

Primeiro.- Foi recibido Atestado da Policía Nacional numerado como 2818/2020 xunto co que foi presentado como detido Ruslanas [REDACTED].

Ademais do feito que motivou a detención son relatados diversos feitos anteriores que tentamos expor de forma cronolóxica:

Feito 1 (suposto previo que xa motivou o inicio doutras actuacións xudiciais).

Que o día oito de abril foi tramitado o Atestado 2708/20. Xunto con ese Atestado foi presentado o mesmo detido. Que o motivo da detención e posta a disposición estaba relacionado coa posíbel comisión dun delito de desobediencia e un delito de roubo. Que entre o día 20 de marzo e o 07 de abril constábanlle catro denuncias por infraccións administrativas relativas ás limitacións derivadas do Estado de Alarma. Ademais imputábenselle dous delitos leves furto e a participación na pelexa na que se podería ter cometido un roubo.

Feito 2 (denuncias administrativas previas).

Que nas 24 horas anteriores á detención fora proposto en varias ocasións para sanción pola mesma infracción administrativa relativa ás limitacións derivadas do Estado de Alarma.

En concreto:

Parte 215263. No que consta que ás 18.30 do día 14 de abril activouse a alarma da Farmacia da rúa Benito Corbal nº 50. Ao acudir ao lugar aclarouse que non se producira unha tentativa de atraco. Nese momento é identificado en rúa Andrés Muruais o detido e, xunto a el, a [REDACTED] [REDACTED]. Propoñen para sanción e retiran do lugar. Non consta realizado ningún requirimento. O Parte 215252 refírese ao mesmo feito.

Parte 215916. No que consta que á 01.48 do 15 de abril foron identificados na rúa Joaquín Costa o detido e [REDACTED] [REDACTED]. Non consta realizado ningún requirimento. Parte 215737. No que consta que foron identificados o detido e [REDACTED] [REDACTED] pero non aclara nin cando (en todo caso antes das sete da mañá) nin onde. Non consta realizado ningún requirimento. Non se aclara se a referencia é a mesma ocasión que no parte anterior pero parece que así é e que responde un á acta concreta e o outro ao resumo da noite.

Parte 217019. No que consta que ás 15.10 do día 15 de abril o detido entrara no supermercado Froiz de Benito Corbal colleu unhas cousas e foi sorprendido polo que, ao ser requirido polos empregados, soltou as cousas e marchou. Cando os axentes falaban co responsábel do Froiz observaron ao detido entrar no Supercor próximo. Son identificados o detido e [REDACTED] [REDACTED]. O detido e [REDACTED] [REDACTED] son propostos para sanción.

Feito 3 (outro delito leve de furto no mesmo día).

Que ás 14.22 horas do día 15 de abril o mesmo presentado como detido tentara levar da Farmacia situada en rúa Frai Juan Navarrete esquina con rúa Sagasta produtos por valor de 14,95 euros.

Estes feitos deron lugar ao Atestado 2817/20.

No Parte 21677 aclárase que o detido fora retido polo persoal da Farmacia e que ao chegar os axentes localizaron no seu pantalón o xel furtado. [REDACTED] [REDACTED] atopábase no exterior da Farmacia. Consta que ambos foron denunciados de novo pola infracción da normativa administrativa.

Feito 4 (actuación na que se produce a detención).

Que ás 17.09 do día 15 de abril a Policía foi avisada de que se accionara a alarma da Farmacia da rúa Rosalía de Castro. Alí relátanlles que un varón tentara levar cremas e fora botado polas dependentas, dirixíndose cara o Froiz desa rúa que lle pechou as portas impedíndolle a entrada. Acudiu entón ao supermercado DIA onde colleu paquetes de xamón por un importe de 41,86 euros.

A policía identificouno e localizou entre a súa roupa eses produtos.

Comprobaron entón que existían unha serie de denuncias previas por infracción administrativa.

Proceden entón á detención de Ruslanas [REDACTED]. Manifesta o Atestado que *"En dicha detención el presentado como detenido*

ofrece resistencia activa sobre los agentes, teniendo que utilizar la fuerza mínima imprescindible para proceder a su engrilletado."

A presentación como detido é pola presunta comisión dun delito de desobediencia ou resistencia aos axentes da autoridade.

Pese a ser ese o delito que motiva a detención consta realizado ofrecemento de accións á señora [REDACTED] como empregada de DIA.

Segundo.- Recibido o Atestado acordouse a incoación das presentes Dilixencias previas nas que se tomou declaración ao detido, que se acolleu ao dereito a non declarar e celebrouse comparecencia en relación coa súa situación persoal. Na comparecencia o Ministerio Fiscal instou a adopción da medida de prisión provisional apelando ao punto 2 do artigo 503 da LACrim. A defensa manifestou a súa oposición.

RAZOAMENTOS XURÍDICOS

Primeiro.- O primeiro que debemos aclarar é o obxecto desta instrución.

Como indicamos nos antecedentes o detido foi presentado como tal pola suposta comisión dun delito de desobediencia e ou resistencia. Ademais dos feitos a iso referido son relatados feitos que poderían constituir un delito leve de furto que sería en grao de tentativa polo sucedido sobre as 17 horas na Farmacia da rúa Rosalía de Castro e que non está aclarado se chegou a ser consumado polo sucedido pouco despois no supermercado DIA. Ademais son mencionados outros feitos que poderían constituir delitos patrimoniais que terían dado lugar a outras dilixencias. Por ese motivo procede **expedir testemuño en relación cos feitos que poderían constituir delitos patrimoniais para proceder á súa tramitación en causa diferente.**

Resta como feitos obxectos desta causa, en consecuencia, o referido á suposta comisión dun delito de desobediencia e ou de resistencia.

Terceiro.- Sobre o delito de desobediencia.

O delito de desobediencia protexe o ben xurídico orde pública. Deféndeo mediante a defensa, instrumental a ese fin, do principio de autoridade. Concretamente en canto ese principio supón a necesidade de que os mandatos concretos emitidos pola autoridade e os seus axentes no exercicio das súas funcións non sexan descoñecidos polos concretos destinatarios deles.

Cada mandato dunha autoridade ou os seus axentes xustifícase nunha norma que lle confire a potestade que exerce ao emitilo. Esa norma, fonte da potestade, protexerá diversos bens e intereses. Pero eses bens ou intereses non son propiamente o obxecto de protección deste tipo penal aínda que, evidentemente, véxanse protexidos de forma reflexa. O axente da autoridade, por exemplo, dará unha orde para aplicar as

normas de tráfico que protexen a seguridade viaria. Pero a sanción penal da desobediencia a ese concreto axente pretende protexer o principio de autoridade e non a seguridade viaria. Por iso, non cabe, en xeral, entender exenta de pena a conduta desobediente apelando á relación do concreto mandato co fin da norma que se aplica con el. Outra cousa diversa é que inflúa na valoración da gravidade (a maior distancia entre o mandato concreto e a finalidade pola que se recoñece a capacidade de dolo, menor gravidade) ou que o mandato concreto sexa manifestamente ilegal ou, por outro motivo, non acredor de protección penal.

A observancia das normas xerais non poden dar lugar máis que a cumprimentos ou incumprimentos, non a delitos de desobediencia

Só se desobedece un mandato concreto. A norma xeral, aínda que introduza prohibicións, non é susceptible por si mesma de ser desobedecida neste sentido penal.

O mandato debe ser concreto obxectivo e subxectivamente. Obxectivamente en canto ten que existir un acto que concrete nun mandato determinado a previsión da norma xeral. Subxectivamente en canto ten que existir un acto da autoridade ou os seus axentes dirixido a unha persoa concreta (a autora da conduta).

A conduta é desobedecer, e desobedecer supón omitir o comportamento que impón o mandato. Para poder omitir ese comportamento ten que ser coñecido o seu contido e que foi obxecto dun mandato. A mellor forma de probar ese feito é probando que se produciu un requirimento formal que explicase que era un mandato, que era o que se mandaba e cal era a consecuencia de non cumprilo. Pero o que constitúe o delito é o feito de coñecer o mandato, a obriga de atendelo e o feito de non atendelo. Por iso é discutíbel a esixencia de que se produza un apercibimento formal advertindo da consecuencia penal. A súa ausencia pode nalgún caso derivar en ausencia de dolo entendido como coñecemento deses elementos típicos: o mandato, o mandado e as consecuencias da desatención.

Coa aprobación do **Real Decreto de Alarma** impóñense unha serie de prohibicións referidas á circulación de persoas.

Estamos ante unha norma de carácter xeral que impón unha actuación as Forzas e corpos de seguridade. Nese labor poderán ter que emitir concretos mandatos a persoas que infrinxan a prohibición ou, incluso, a outras que aínda non incumpriran.

Son dous supostos diferentes:

A) Existe unha prohibición xeral de transitar por vía pública.

É un mandato xeral. O seu incumprimento supón (ou pode supor) unha infracción administrativa con penas de multa que poden chegar a ser altas. A Policía cando identifica o suposto de feito (estar na rúa sen xustificación) interpón unha denuncia

ante órgano administrativo describindo o feito. Pode (ou non) ademais requirir á persoa que cumpra a norma e ese requirimento pode (ou non) concretarse nunha conduta determinada ("volva vostede á súa casa"). Neste caso pasamos ao segundo suposto.

B) A policía require unha conduta a un suxeito determinado. É un mandato concreto. A súa desatención pode supoñer unha infracción administrativa. Non se aplica propiamente o Real Decreto. Aplícase a Lei administrativa que corresponde ao caso.

As situacións poden ser variadas. Polo fundamento do requirimento que pode ser só o control do cumprimento das medidas do Real Decreto de Alarma ou ir acompañado doutros motivos (por exemplo, que nese caso estase realizando un control de drogas, ou que nesa zona non pode estar con ou sen a situación de alarma, ou que existe unha alteración da orde pública diversa). Polo propio requirimento que pode non existir (policía que só comunica a proposta de sanción sen maior comentario), que pode ser xenérico (referindo só que se cumpra a Lei sen maior precisión) ou que pode ser específico (regrese á súa casa). Polos supostos de feito que o provocan (estaba fose paseando, ía ao Banco, dirixíase a atender un familiar) e polas posibilidades de cumprimento (indicar que regrese a casa a quen o que non ten é casa, ou requirir a quen é localizado viaxando dende moi lonxe que regrese a ese punto de orixe).

Algunhas desas situacións de non cumprir o requirido poden constituír delito de desobediencia.

En todo caso **o desobedecido, a efectos de valoración penal, nunca é a norma xeral senón o mandato concreto recibido.** Por iso o que debe ser analizado é en que circunstancias se produciu ese mandato.

Para que sexa delito a desobediencia debe ser grave.

A gravidade deriva do conxunto de circunstancias. Entre elas está como se afecta ao principio de autoridade. Por exemplo, un incumprimento público e ostentoso pode debilitar ante a comunidade ese principio de autoridade. Tamén debe ser valorado se hai ou non afección ao ben protexido pola norma que ampara o mandato. Xa dixemos que non é o obxecto de protección pero si debe ser de atención en canto á gravidade da conduta. O confinamento pretende evitar contaxios por contacto entre persoas ou de persoas con cousas tocadas por outras persoas. A única forma (parece ser) de executalo é facendo unha norma xeral sen excepcións. Iso pode xustificar que en todo caso o incumprimento da norma xeral derive en responsabilidade administrativa e a desatención ao mandato concreto tamén teña esa resposta administrativa. A consideración como delituosa da conduta esixe algo máis que iso.

Ademais só se considera relevante penalmente a desobediencia que mereza a consideración de grave. Para valorar a gravidade e dar transcendencia penal si cabo valorar (non requirir como imprescindible pero si ponderar) que se produza unha afección á finalidade da norma que ampara o mandato concreto. Por exemplo, é máis grave o desatender o mandato cando se está en circunstancias de propagación posible (por estar contaxiado o suxeito, polo lugar de tránsito ou por estar preto de persoas de risco) e tamén o é cando se mina a confianza xeral no cumprimento da norma de confinamento (por exemplo, por ostentación do non cumprimento en redes). É menos grave noutros supostos. E aquí hai que ter tamén moi en conta que a conduta xa conta cunha resposta na responsabilidade administrativa.

En todo caso **que unha persoa sexa denunciada varias veces non supón que necesariamente debamos entender que comete delito.** O ser denunciado varias veces é unha reiteración de infraccións administrativas, pero non se introduce nese feito, así descrito, a conduta típica: desatender mandatos concretos. Haberá ocasións en que, ademais de ser denunciada a persoa varias veces, reciba varios mandatos concretos e desatendeunos. Entón haberá que analizar no caso en que consistiu esa desatención e, desde aí, si é un único acto desobediencia, varios actos de desobediencia ou se algún deles estaba xustificado e outros non. Ademais, haberá que xustificar que ese casos (eses casos ou parte deses casos) merecen a consideración de graves por como afecten ao principio de autoridade e, con máis cautela, por como afecten aos bens que se queren protexer coa norma prohibitiva xeral. Por poñer un exemplo con outra norma quen conduce varias veces a máis velocidade da permitida, e así incumpre a norma xeral de Tráfico, non por iso comete delito.

Cuarto.- No caso concreto.

Como expuxemos nos antecedentes no Atestado son referidos diversos feitos. Parte deles son obxecto doutra causa tramitada por outro Xulgado (o que denominamos Feito 1).

Os demais quedan concentrados nos días 14 e 15 de abril.

No referido a eses días consta que en tres ocasións anteriores ao momento da detención fora denunciado o detido por estar a incumprir a normativa xeral sobre tránsito pola rúa. Ás 18:30 do 14, á 1:48 do 15 e ás 15:10 do 15. Hai dous partes de intervención máis pero que todo indica que serían partes sobre os mesmos feitos realizados por outras patrullas ou axentes. En ningún deses casos consta expresado nos partes achegados que se realizara requirimento de ningún tipo ao agora detido. (Feito 2 dos antecedentes).

Ademais deses tres supostos, ás 14:22 horas consta que foi identificado trala posíbel comisión dun delito leve de furto,

parece ser que en grao de tentativa. Non consta tampouco expresado ningún requirimento. (Feito 3 dos antecedentes).

O seguinte momento é xa o que finalizou coa detención (Feito 4). Sucede ás 17:09 do día 15 de abril. Como vemos, este sería o quinto feito e non o sétimo como afirmaba o Atestado a falta de verificar o que parecen duplicidades nos partes. Do total das denuncias producidas sería a novena e non a número dezaseis.

Na información remitida por Comisaría non consta expresado ningún requirimento concreto que tivera sido practicado. Será obxecto desta instrución, xa que logo, en primeiro lugar aclarar se se produciu algún tipo de requirimento e/ou advertencia neses casos así como os termos das mesmas e a forma de resposta dada polo investigado.

Entendemos que os feitos non contan actualmente con suficiente precisión en canto á súa descrición, nin determinación de indicios de apoio como para poder proclamar con claridade o seu exacto alcance.

Unha vez que se concreten os feitos caberá valorar se si existiron eses requirimentos e se existe unha continuidade entre eles. Tamén haberá que determinar que relación terían estes feitos co sucedido antes do día 7 de abril e que está a ser obxecto doutra causa noutro Xulgado.

Só despois desa análise caberá valorar se realmente cabe predicar que se cometeu un delito de desobediencia.

En todo caso, no momento de valorar a adopción de medidas constatamos a pouca solidez dos indicios presentados.

Debemos engadir que tampouco existe ningunha concreción sobre o sucedido no momento da detención ou sobre ameazas que puidera ter proferido e o Ministerio Fiscal tampouco referiu eses feitos nas súas alegacións como xustificadoras da medida instada.

Quinto.- Sobre a medida de prisión provisional.

O delito de desobediencia, que é ao que se refire a petición do Ministerio Fiscal, está sancionado no artigo 556 do Código Penal cunha pena de tres meses a un ano ou multa seis a dezaioito meses.

Non se trata só de que a pena prevista non supere os dous anos (queda na metade) senón que parte dun mínimo moi inferior (tres meses) e só é unha alternativa coa pena de multa. Esas circunstancias dan conta da entidade que o lexislador deu a esa conduta.

A prisión provisional aparece regulada, en canto aos requisitos e finalidades que poden xustificar a súa adopción, no artigo 503 LACrim. En principio a previsión normativa só permite tal tipo de medida cautelar cando a pena máxima prevista para o delito imputado sexa igual ou superior a dous anos de prisión. Neste caso non se daría tal requisito co que

non cabe acordar a prisión con fundamento no punto 1 do artigo 503 LACrim.

O punto 2 do artigo 503 permite a adopción desa medida para evitar o risco de que o investigado cometa novos feitos delituosos. Dentro desta finalidade esixe a Lei que a pena máxima prevista supere aqueles límites salvo no regulado no último parágrafo do mesmo precepto. Nese parágrafo permite a adopción da medida de prisión provisional para conxurar ese risco en dous casos aínda que non se cumpra o requisito da pena. Un é referido a actuación concertada de forma organizada para cometer os feitos imputados, que non é aplicábel a este caso. O outro é o referido a que *"realiza sus actividades delictivas con habitualidad"*. Este sería o suposto de feito que entende presente o Ministerio Fiscal.

Antes de entrar na análise dese último requisito debemos enmarcar o suposto de feitos con algunhas precisións.

Remítese na argumentación do Ministerio Fiscal á situación de Estado de Alarma. Porén debemos ter en conta que o Goberno optou pola declaración dese tipo de Estado non sen certas críticas doutrinais sobre o suposto de feito e o alcance que podían ter as medidas adoptadas nel. Na Lei Orgánica 4/1981 de 1 de xuño de estados de alarma, excepción e sitio, atopamos que no seu artigo 10 no referido ao estado de alarma e ás consecuencias sobre os incumprimentos das súas medidas só prevé que *"será sancionado con arreglo a lo dispuesto en las leyes"*. Ningunha novidade no que se refire á responsabilidade penal ou ao proceso penal. **A mesma Lei no referido ao Estado de excepción si prevé expresamente unha consecuencia:** *"Si durante el estado de excepción el Juez estimase la existencia de hechos contrarios al orden público o a la seguridad ciudadana que puedan ser constitutivos de delito, oído el Ministerio Fiscal, decretará la prisión provisional del presunto responsable, la cual mantendrá, según su arbitrio, durante dicho estado"*. Cabería discutir o exacto alcance desa previsión pero o que resulta claro é que a mesma non existe no caso do Estado de alarma.

En segundo alegar apélase ao perigo que pode supor para a saúde pública o non cumprimento do confinamento. Non procede en absoluto cuestionar nesta resolución tal medida adoptada respecto a toda a poboación nin a súa transcendencia no momento no que nos atopamos. Pero si é preciso advertir que non cabe inferir da gravidade xeral da situación, nin do beneficioso que con carácter xeral sexa o confinamento da poboación, a consecuencia de que calquera individual infracción supón o mesmo grao de perigo. É esixíbel concretar como esta concreta infracción supuña ese perigo. Pero, ademais, resulta que existen medidas a acordar polas Autoridades sanitarias, sen acudir ao dereito penal, para responder a supostos concretos de risco. Así deriva da Lei



Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de saúde pública (sobre todo artigo 2), a Lei 14/1986, de 25 de abril, Xeral de Sanidade, a Lei 41/2002, de 14 de novembro, Básica reguladora da autonomía do paciente (sobre todo artigo 9.2), a Lei 33/2011, de 4 de outubro, Xeral da Saúde Pública ou, por último, o artigo 8.6 no seu parágrafo segundo da Lei 29/1998, de 13 de xullo, da Xurisdición contencioso administrativa. Dese cadro normativo derivase que **a resposta se o que se quere conxurar é un risco para a saúde pública non se atopa no dereito penal e no proceso desa natureza.** Queda claro, de novo, que o protexido neste tipo penal é a orde pública e é a afección a ela a que debe ser valorada tanto para determinar a gravidade do caso concreto como a procedencia de medidas cautelares.

Neste marco debemos preguntarnos sobre a finalidade que se pretende conxurar coa prisión provisional segundo a petición do Ministerio Fiscal. Como xa vimos esa finalidade sería a de evitar a comisión de novos feitos. Convén traer aquí a colación a recente sentenza do Tribunal Constitucional STC 62/2019, de 7 de maio:

*"Nuestro cometido debe circunscribir al examen de la argumentación que el órgano judicial emplea para justificar el riesgo de reiteración delictiva, a fin de valorar si resulta irrazonable, arbitraria o que, en contra de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos reflejada en el fundamento jurídico 3 c) de la ya citada STC 30/2019, ofrezca «cobertura a decisiones de prevención general dirigidas contra un individuo o una categoría de individuos que se estime constituyan un peligro debido a su continua tendencia al crimen; sino que, más limitadamente, **en el contexto de la persecución de un delito**, los arts. 5.1 c) y 5.3 del Convenio, interpretados conjuntamente, permiten a los Estados contratantes imponer y mantener en el tiempo una privación cautelar de libertad previa al juicio como medio de **prevención de una concreta y específica infracción penal, finalidad que ha de venir fundamentada en hechos o informaciones concretas basadas en datos objetivos**»".*

A finalidade que prevé a LACrim de acordar a prisión provisional para conxurar o risco de comisión de novos feitos sempre foi definida polo propio Tribunal Constitucional como situada "noutro plano" respecto ás outras finalidades lexítimas (risco de fuga, de obstaculización do proceso ou de protección da vítima). Tal expresión ten sido con bos argumentos interpretada como fonte dunha interpretación máis restritiva aínda da restrición que xa se predica dos outros casos. Pero en todo caso non permite amparar nesa finalidade a pretensión de conxurar un risco xenérico de comisión de novos delitos. Como se indica no fragmento transcrito debe existir

unha posibilidade concreta de que exista un determinado feito que se pode afirmar como de moi probábel comisión.

Por outra banda, tal finalidade de necesaria interpretación restritiva, ademais, solicítase que sexa aplicada a un suposto para o que con carácter xeral non se prevé esta medida. É dicir para un caso de pena máxima prevista inferior a dous anos. Tal suposto de feito legal parece requirir aínda máis restrición na interpretación. Por iso a interpretación do concepto "*habitualidade*" debe ter esa mesma nota. Certamente tal termo non exige a presenza de antecedentes penais pero si require que se entenda que o que se fai habitualmente é cometer delitos. Doutra forma o sancionado sería un modo de vida. A habitualidade pode ser un concepto vago pero remite a algo que se fai tal número de veces, con tal frecuencia e dunha forma tan estendida no tempo que tolera que se fale dun hábito. É algo máis que repetición dunha conduta pois debe chegar a ter entidade esa repetición para considerala xa habitual.

Sexto.- Sobre o caso concreto.

Traendo todo o que acabamos de expor ao presente caso entendemos que non pode ser acordada a medida de prisión provisional instada.

Estamos, como vimos antes, ante unha imputación non sólida en canto non consta no Atestado máis que que no día catorce no quince foi identificado cinco (que non sete ocasións) e non consta nin se foron realizados requirimentos, nin sequera se algunhas desas denuncias non responden a un mesmo momento dada a súa proximidade no tempo.

Estamos ante un delito que ten unha pena de multa e outra alternativa de prisión de tres meses a un ano. Está, pois, moi lonxe dos límites xerais desta medida cautelar.

A situación de Estado de alarma non supón variación algunha das normas habituais de valoración das medidas cautelares. Si podería supor algún tipo de variación a declaración dun Estado de excepción.

Os posíbeis perigos sanitarios non se concretan de forma ningunha no Atestado neste caso concreto. En todo caso, de existir, teñen resposta no ámbito administrativo sanitario.

Non existe unha suficientemente sólida concreta previsión de actos determinados que poderían ser cometidos novamente. Existe unha sospeita moi razoábel de que o investigado pode ser que volva a incumprir as normas xerais. Pero esa prognose non é igual á previsión dun concreto acto que se poida prever e que teña por si mesmo natureza de delito.

Por último, en canto á habitualidade, tampouco a observamos. Dado o tempo dende que se decretou o Estado de alarma e, con el, foron acordadas as medidas restritivas da liberdade deambulatoria xa resulta difícil afirmar que un acto poida ter chegado a adquirir o carácter hábito. Caberá dicir que foi

repetido neste mes e pouco pero de aí á consideración de tal habitualidade cremos que existe un paso. Pero é que, ademais, estaríamos valorando dúas veces os mesmos feitos. Por un lado sostense que é o feito de ter desatendido varias veces os requirimentos o que fai transcendente penalmente a conduta co que adquieren significado penal como un único feito. Inmediatamente afírmase que o último feito é habitual por ter sucedido outros anteriores pero eses anteriores, polo que acabamos de dicir, forman unidade con este.

En resumo, a situación pode xerar certa afección ás previsións de orde pública pero a atención a esas necesidades non cremos que neste caso estea na medida pedida que debe ser instrumental ao concreto proceso penal e non a necesidades preventivas de orde pública.

Sétimo.- Non foi instada ningunha outra medida nin estaríamos tampouco nos casos regulados no artigo 57 do Código Penal ao que se remite o artigo 544 bis LACrim polo que non procede valorar ningunha outra medida alternativa.

Por último só indicar que o Ministerio Fiscal instou, de forma subsidiaria, que en caso de non ser acollida a medida pedida procedera a transformación do procedemento en Dilixencias urxentes. Porén non cabe tal transformación. Recibido o Atestado non se incoou, nin así foi solicitado polo Ministerio Fiscal, un procedemento dos denominados de Dilixencias Urxentes. En todo caso, dada a necesidade de verificar os aspectos do tipo penal antes comentados, non aparece como causa de instrución sinxela nos termos legais. Unha vez incoadas Dilixencias previas a súa transformación pende da previsión do punto 5º do artigo 779 LACrim, é dicir do recoñecemento de feitos que non se produciu neste caso. Non procede a transformación solicitada.

PARTE DISPOSITIVA

NON ACORDAR a medida de prisión provisional procedendo a deixar en liberdade a Ruslanas [REDACTED] coa obriga de comparecer ante este Tribunal no momento en que sexa chamado. NOTIFÍQUESE a presente resolución ás partes facéndolles saber que contra a mesma poderán interpor recurso de reforma no prazo de tres días dende a súa notificación e/ou de apelación no de cinco días.

Así o manda e asina Xermán Varela Castejón, maxistrado do Xulgado de instrución nº 2 de Pontevedra. Doy fe.

EL MAGISTRADO-JUEZ

LA LETRADO JUDICIAL